

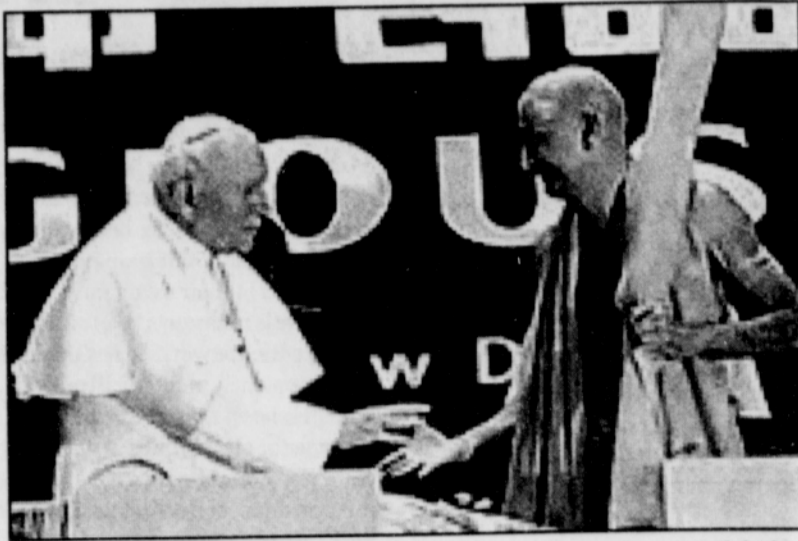


Metro / EL OBSERVADOR DE PORTLAND

A weekly supplement from The Portland Observer

El Papa criticó desigualdad social y sistema de castas

Nueva Delhi [DPA]. El papa Juan Pablo II censuró hoy las desigualdades sociales entre ricos y pobres en Asia y dejó entrever también una crítica al sistema de castas indio, en una misa que celebró hoy en Nueva Delhi. El religioso llamó a las decenas de miles de creyentes que se reunieron en el estadio Jawaharlal Nehru a luchar contra las "estructuras sociales de la desigualdad". A la vez, el sumo pontífice reafirmó que la Iglesia Católica seguirá intentando convertir a creyentes de otras religiones, a pesar de las fuertes protestas de radicales hindúes, y tuvo duras palabras para la persecución de cristianos en China. La misa de hoy en la capital india, a la que asistieron según diferentes fuentes entre 40.000 y 60.000 personas, fue el punto culminante de la visita de tres días del Papa a India. "De un lado, ha habido un enorme progreso económico y tecnológico, pero de otro existen todavía situaciones de extrema pobreza e injusticia", dijo con respecto al desarrollo en Asia.



Juan Pablo II estuvo tres días en la India, en una delicada visita debido a la protesta de los extremistas hindúes.

Otras de sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica al sistema de castas del país, que condena a la pobreza aún hoy a millones de "intocables", la casta más baja de la estructura social. Así, Juan Pablo II afirmó sin mencionar expresamente el sistema de castas que "los pecados de personas individuales se transforman en una estructura social de injusticia", pues hay "una desigualdad económica y cultural que discrimina a la gente y la

empuja a los márgenes de la sociedad". Debido a las protestas de hindúes radicales la misa se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad. A pesar de ello, el jefe de la Iglesia Católica rechazó la propuesta de las fuerzas de seguridad indias de predicar desde detrás de un cristal antibalas. La tarea en Asia En varias ocasiones el Santo Padre instó a los cristianos a misionar en Asia, labor que generó

las protestas de los hinduistas radicales. Ninguna religión debe dominar a otra, advirtió, pero el misionar es un precepto cristiano. La libertad de confesión es un derecho humano, subrayó, y éste incluye el derecho a cambiar de religión. En su discurso de cierre del sínodo de obispos asiáticos, el Papa manifestó su respeto por las religiones hindú, musulmana y judía, pero añadió que "los valores religiosos que enseñan esperan realizarse en Jesucristo". Las declaraciones de Juan Pablo II ponen de manifiesto un enfrentamiento total con los grupos fundamentalistas hindúes, que consideran la labor de misionar como un "asalto a la cultura india". Hace un año un misionero australiano y sus dos hijos fueron quemados vivos en el estado oriental de Orissa, mientras que en el estado occidental de Gujarat fueron destruidas 30 iglesias. Más del 80 por ciento de los casi 1.000 millones de indios son hindúes, 12 por ciento musulmanes y sólo el 2,4 por ciento cristianos. En casi todos los países asiáticos los cristianos son minorías.

Hispanic newspaper executives hear concerns regarding 2000 census

CONTRIBUTED STORY FOR THE PORTLAND OBSERVER

U.S. Census Monitoring Board Congressional Member A. Mark Neuman told members of the Federation of Hispanic Owned Newspaper meeting here Friday for the 7th International Hispanic Media Conference he is concerned that there is a lack of a clear strategy by the Census Bureau to meet the needs of linguistically isolated communities, including Hispanics, in the 2000 Census. "The members of the Monitoring Board believe that the number one goal of the 2000 Census is to reduce the differential undercount of minority populations. And we believe that an accurate census is the number one civil rights of the year 2000," he said "The differential undercount of low-income, urban and rural minority communities must be reduced because political representation and vital government funding are determined by the census." Nearly five million people were missed in the 1990 Census. They were disproportionately Hispanic, African American, Asian American and Native American. More than half were children. They lived in such hard-to-count areas as barrios, inner-city neighborhoods throughout the country for census 2000. "The Census Bureau has a good plan for counting 95 percent of the population," Neuman told the Hispanic newspaper executives. "But we [the Congressional Members of the Board] are concerned that the Bureau still does not have an effective strategy to count the last five percent of the population that is in hard-to-count neighborhoods." "The Administration says their plan is already set in stone and it is too late to change anything," said Neuman who was Director of Congressional Affairs at the Census Bureau during the 1990 Census and the agency's highest-ranking Hispanic official. "Well, we disagree with the Director of Census Bureau. We think there is still time to make improvements." Several of the recommendations made by the Congressional Members of the Board include sending a duplicate Spanish-language mailing to the neighborhoods that the Bureau knows are almost exclusively Spanish-speaking, removing barriers to hiring people from hard-to-count neighborhood to help count their neighbors, granting waivers that would allow those receiving Food Stamps and residing in public housing to be hired as temporary Census workers without losing their benefits, and dedicating a portion of the \$4.7 billion Census 2000 budget to ensure a more fair and accurate count of those 2,600 hard-to-count neighborhoods. "The Bureau says it is too late to do these things-even in the small number of neighborhoods where this matters most," said Neuman. "We disagree and we are going to fight for what we think is right, because we think ensuring fair political representation, the most fundamental right if every American, is worth fighting for."

Gobierno Colombiano defiende utilidad de zona desmilitarizada

Bogotá [AFP]. El Gobierno Colombiano defendió este domingo la utilidad de la zona de 42.000 km2 del sur del país, desmilitarizada desde el 7 de noviembre de 1998 para facilitar el esquema de paz con la guerrilla marxista de las FARC, aunque admitió que ha habido "algunos inconvenientes" relacionados con el respeto a los derechos humanos. "Transcurrido un año desde su puesta en marcha, un balance de la zona de distensión permite establecer que ha sido útil como instrumento al servicio del diálogo y la negociación", señaló el Alto Comisionado para la Paz, Víctor Ricardo, en una carta publicada por el diario "El Tiempo". En otras declaraciones a la prensa, el funcionario dijo que el mecanismo de la zona desmilitarizada - cuestionado por los militares, un sector de la derecha política de Colombia y líderes de diversos sectores estadounidenses - ha permitido "crear confianza entre las partes y avanzar en el plan de paz como nunca antes en la historia del país". Ricardo recordó que el presidente colombiano, Andrés Pastrana, ordenó el retiro de las tropas regulares de los cinco municipios comprendidos en el área de 42.000 km2 "amparado en la ley y por una decisión autónoma, y no en respuesta a una conquista armada de la insurgencia". Los críticos del "experimento de paz" - como lo llama el Gobierno - y la jefatura militar afirman que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

(FARC) no están utilizando esa región para avanzar en el diálogo, sino para reforzar su aparato de guerra y cometer abusos contra los lugareños. Algunos inconvenientes Ricardo escribió en la carta publicada por "El Tiempo" que, no obstante la utilidad de la zona desmilitarizada para llevar adelante el plan de pacificación, "se han registrado también algunos inconvenientes y traspiés". "Algunos de esos inconvenientes son objetivos y han motivado la preocupación del Gobierno. Entre ellos, los que se refieren a denuncias sobre algunos comportamientos de habitantes de la zona desmilitarizada", expresó el Alto Comisionado. Según Ricardo, "el Gobierno ha sido claro en que se deben respetar los derechos humanos y las libertades públicas (en la zona de 42.000 km2). Las autoridades democráticamente elegidas (los alcaldes) tienen plena competencia y existe un compromiso de la guerrilla para respetarlos". El funcionario señaló que "algunas de las dificultades originadas en la zona de distensión han sido magnificadas, en ocasiones al grado de hacer perder de vista los avances del proceso y de centrar en ellas una valoración inadecuada sobre su éxito o fracaso". La Defensoría del Pueblo de Colombia, la organización Amnistía Internacional (AI) y otras entidades independientes afirman que las FARC han secuestrado y ejecutado a varios civiles en ese territorio, casi tan extenso como Suiza y dos veces más grande que El Salvador.

HISPANIC MARKETING

Multnomah County to examine INS bed rental policy

CONTRIBUTED STORY FOR THE PORTLAND OBSERVER

At the request of Commissioner Serena Cruz, the Multnomah County Board of Commissioners approved the appointment of a task force to examine the county's policies of renting beds in its adult and juvenile correction facilities to the U.S. Immigration and Naturalization Service. These beds are paid for by INS to detain individuals based solely on their immigration status. The ordinance authorized a task force of public safety and immigration stakeholders to begin the work of researching INS detention policies and the impact of those policies on the county's public safety system. The task force will examine the following questions: How do public safety stakeholders interact with each other to carry out the INS hold policy? How would any change in the policy affect the public safety system? What is the process that detainees go through while they are under INS holds? What are their rights for legal representation? In 1996, the U.S. Congress passed immigration laws ensuring that INS detention would increase dramatically. It has failed however, to take into account the human costs of new laws or the tremendous burden placed on the INS and local jails in implementing the sweeping

changes," Commissioner Cruz noted. By August 1998, the number of individuals detained nationally by the INS reached approximately 15,000 an increase of roughly 70 percent from just two years earlier. By the year 2001, the INS estimates that more than 23,000 men, women and children will be immigration detention. The INS is scrambling for bed space to hold the growing number of detainees. Since there are not enough immigration detention centers to accommodate detainee, the INS has relied on county and city jails to handle the overflow. Currently, almost 60 percent of the INS detainees are held in local jails. The Department of Justice states that reliance on local jails is "more cost effective than the construction and operation of federal facilities." In fact, the INS is directed by statutory law to explore the use of existing facilities before building additional bed space. As of February 1998, the INS held valid contracts with 1,041 local jails. Multnomah County's experience mirrors the national data. In FY 1989-90, Multnomah County received \$63,000 from the federal government for renting county beds to the INS. In 1998-99 the county received \$2,745,000 for INS holds. In addition to the bed rental revenue, the county has received hundreds of thousands of dollars from the State Criminal Alien Assistance Program grants because

its cooperation with the INS. Cruz believes that the county's dependence on renting bed to the INS may not be a sound fiscal policy. "We are currently facing a significant shortfall of revenue that was budgeted as INS bed rental revenue." This unanticipated shortfall will impact the operation of programs such as alcohol and drug treatment in the jails. The most obvious impact of renting beds to the INS is that it takes those beds away from inmates accused of local crimes. Several times this summer, the county had to take action to prevent matrixing inmates from the jail. When the jail is full, matrixing determines which inmates can be released early because they pose the lowest security risk) Under the agreement with INS, the county could not matrix inmates with an INS hold. Linda Ramirez, an attorney who frequently represents clients held in the county jail under an INS hold, gave the board an overview of the difficulties such cases involve. She cited examples of the lack of communication and information from the INS about the status of a case and clients who are not allowed to participate in treatment programs or in pre-trial release. The task force will report their finding back to the Board of County Commissioners by the end of January 2000.

Usted tiene una familia que lo respalda

Imagínese: hoy cambia todo. "Yo" da paso a "nosotros". "Nuestro" sustituye a "mío". Y vivir feliz el resto de la vida es una meta, no un hecho. ¿Está nervioso? Para nada. Usted cuenta con el apoyo de una familia sólida. American Family Mutual Insurance. Cuando esté construyendo un futuro, la confianza lo es todo; 70 años de experiencia en el campo de los seguros es lo que ambos necesitan para sentirse seguros. En cuanto a un compromiso se refiere, American Family mantiene el rango A+ (Superior) que otorga A.M. Best, la respetada autoridad en la puntuación de agencias de seguros. Eso lo dice todo. Sólo llame y, con mucho gusto, uno de nuestros amables agentes le dará más información. Ahora, respire profundo. Luego... ¡avíentese! Nosotros lo protegemos.

AMERICAN FAMILY INSURANCE
AUTO HOME BUSINESS HEALTH LIFE

Toda La Protección Bajo Un Mismo Techo
La póliza que usted adquiera sólo está disponible en idioma inglés.
American Family Mutual Insurance Company and its Subsidiaries, Madison, WI. 53783-0001 www.amfam.com